

HACIA EL SUR

Cuaderno de la Asociación para la Cooperación con el Sur (ACSUR)-Las Segovias

Elecciones Generales: La agenda de cooperación

Carmen Coll*

Estamos muy lejos de conseguir el compromiso de aportar el 0,7% del Producto Interior Bruto a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), aprobado por las Naciones Unidas en los años setenta. Se estimaba ya entonces que para erradicar la pobreza en veinticinco años hacía falta que los países del Norte aportaran, al menos, esta cantidad de fondos públicos.

Treinta años después de estos acuerdos se sigue haciendo caso omiso de la recomendación, mientras se continúan agrandando las diferencias entre países ricos y países pobres, la pobreza se hace crónica y se expande a muchas regiones de nuestro planeta. Cuando mayor es la creación de riqueza mundial, la AOD, en vez de crecer, disminuye. En la Cumbre Mundial sobre Financiación del Desarrollo de Monterrey, el gobierno español se comprometió a un mínimo del 0,33% para el año 2006. Así que, en ocho años se ha pasado del compromiso del 0,7%, ratificado durante las movilizaciones del año 1994, al 0,33%, menos de la mitad.

Para las organizaciones comprometidas en la transformación de las condiciones en las que más de la mitad de la humanidad no puede cubrir sus necesidades básicas, es intolerable que los países con mayor nivel de riqueza incumplan sus compromisos internacionales. La aportación del 0,7 tiene que ser la parte mínima de redistribución solidaria a nivel internacional.

Ante esta situación, la Coordinadora española de ONGD (CONGDE) puso en marcha una campaña que se inició el año pasado con motivo de las elecciones municipales y autonómicas y que

culmina ahora con las elecciones generales del mes de marzo y las elecciones europeas de junio. Hemos querido participar de una forma activa dentro del proceso electoral para proponer nuestras candidatas y candidatos al 0,7 con el lema "0,7 reclámalo".

La campaña promueve que, en el curso de la próxima legislatura, se alcance la cifra del 0,7% del Producto Interior Bruto para la Ayuda Oficial al Desarrollo. Que se cumplan con los compromisos asumidos en los Objetivos del Milenio. Que los fondos se destinen a la erradicación de la pobreza, tomando en consideración la equidad de género. Que se condone la deuda externa, destinando los fondos así generados a servicios básicos para la población. También, se apoya el cambio en las reglas del comercio internacional, la transparencia en la ayuda y la independencia de la ayuda humanitaria.

En ACSUR-Las Segovias compartimos completamente estos

"No se puede hablar de seguridad cuando se profundizan las injusticias, la marginación y la falta de respeto a los derechos humanos más elementales"

planteamientos, y estamos participando activamente en esta campaña unitaria junto a las más de 90 organizaciones que forman parte de la CONGDE.

Decía Joseph Stiglitz en una intervención en el IV Foro Social Mundial "La globalización económica debe cambiar su rumbo para no socavar la seguridad social. De lo contrario seguirán aumentando la pobreza y la violencia". Así lo creemos también nosotros. No se puede hablar de *seguridad* cuando se profundizan las injusticias, la marginación y la falta de respeto a los derechos humanos más elementales. Los bienes públicos globales, como el derecho a la alimentación, a la educación, a la salud, agua potable... forman parte de los avances de nuestra civilización y su disfrute tiene que estar al alcance del conjunto de la humanidad. Sabemos que esta es una utopía posible: lo que hace falta es conciencia solidaria para distribuir los bienes con justicia. Para ello necesitamos políticas democráticas, económicas y financieras, con voluntad de cambios a nivel mundial.

Las tendencias políticas hegemónicas nos obligan a ser beligerantes en la defensa de estos objetivos. Debemos y queremos incidir para cambiar el rumbo de las políticas actuales. No es una tarea fácil, pero sí totalmente necesaria. Y además no estamos solos: la compartimos con todo el movimiento que trabaja para que "otro mundo" sea posible.

* **Carmen Coll** es la directora de ACSUR-Las Segovias.
dirección@acsur.org

Carlos Berzosa: "Otra universidad es posible"

Tras casi un año como rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Carlos Berzosa confía en lograr que esta institución sea más viva, plural y abierta a la sociedad. Lo dice convencido, aunque reconoce que no será una tarea fácil "porque las estructuras son muy rígidas y hay muchos males que erradicar". Berzosa, catedrático de Economía Aplicada y decano de la Facultad de Ciencias Económicas hasta mayo del año 2003, cuando ganó las elecciones a rector de la UCM cree que "otra universidad es posible".

Para lograrlo, "es necesario crear en la universidad un marco de libertad, abriendo espacios a la participación, a la creatividad, al debate y a la controversia". Un modelo de universidad en el que además hay cabida para la cooperación al desarrollo. Desde su llegada al rectorado, la UCM cuenta con un Vicerrectorado de Cooperación al Desarrollo que se dedica exclusivamente a estudiar cómo integrar este ámbito de trabajo en el marco de la universidad, donde hasta el año pasado no se contaba con una política institucional de cooperación al desarrollo, pero, según cuenta Carlos Berzosa, "hemos introducido esta materia en nuestras estrategias institucionales y para ello, hemos analizado las acciones que ya se están llevando a cabo en otras universidades y las propuestas del CRUE (Consejo Rector de la Universidades Españolas)".

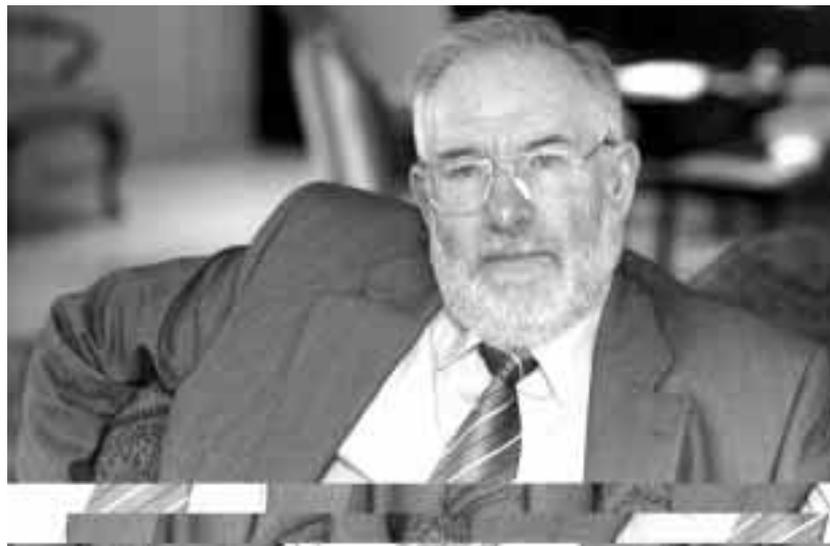
Los objetivos que se ha propuesto son, fundamentalmente, "crear una política de cooperación al desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid que incluya la sensibilización dirigida a alumnos y profesores y la recau-

dación de fondos para realizar proyectos de cooperación" y por qué no, dice Berzosa, "lograr que los profesores donen un 0,7% de su sueldo a estas iniciativas".

Entonces, ¿quiere que la universidad se convierta en fuente de financiación de proyectos de cooperación al desarrollo?

Nuestro presupuesto es reducido y no es fácil, pero lo vamos a intentar. En la medida de nuestras posibilidades intentaremos

combatirlo, incidiendo en la raíz no en la superficie, aunque sabemos que luchar contra las estructuras económicas mundiales que contribuyen a la desigualdad entre Norte y Sur es un ejercicio complejo. No hay que olvidar que la inequidad viene de lejos: de un proceso histórico; de un proceso de industrialización que no se introdujo en numerosos países; de un proceso de colonización que perpetuó la dependencia de los países pobres de los países



Carlos Berzosa, rector de la UCM.

realizar proyectos de cooperación al desarrollo, intensificar la docencia y desarrollar la investigación científica en esta materia, algo fundamental para estudiar qué tipo de cooperación al desarrollo queremos.

¿Qué tipo de cooperación al desarrollo no quieren?

La sociedad muchas veces cree que cualquier cooperación al desarrollo es buena y no es así. Nuestra obligación es estudiar las causas del problema y la forma de

ricos incluso tras su independencia política y que ha derivado en un proceso de desarrollo desigual que se acentúa con el proceso de globalización que estamos viviendo. A todo esto se suma que muchos de estos países han visto cómo una oligarquía, principalmente agrícola, pero también industrial y financiera, ha propiciado esta relación de dependencia. Queremos, en definitiva, trabajar para erradicar las causas de las enfermedades del Sur, no para aliviarlas, porque estamos convenci-



dos de que no toda la cooperación al desarrollo es igual.

¿Qué tipo de proyectos de cooperación al desarrollo realizaría la universidad, una vez cuente con este presupuesto?

Realizaremos proyectos educativos, que es el ámbito donde nosotros podemos aportar más a los países más atrasados. Pero, como ya he mencionado, queremos que sea una cooperación que construya de manera colectiva y participativa y no asistencialmente. En este aspecto, queremos recoger las experiencias de profesores y facultades que ya han llevado a cabo iniciativas en este terreno.

¿Y ha pensado colaborar con las ONG?

Sí, creo que puede ser un ejercicio interesante y constructivo trabajar con diferentes ONG, ya que son ellas quienes acumulan experiencia y conocimiento.

¿Esta colaboración se llevaría a cabo en el Sur o en el Norte?

Nuestro principal objetivo es el Sur, que es donde hay mucho por hacer, pero también potenciaremos nuestras actividades de sensibilización y educación para el desarrollo a través de conferencias, seminarios, cursos y debates. Además, aunque la cooperación al desarrollo ya existe como asignatura de libre configuración en algunas facultades como Ciencias Económicas y en diversos programas de postgrado, nos gustaría extender la cooperación al desarrollo como materia de estudio cuando contemos con un profesorado cualificado para ello.

¿Cree que la educación es una vía de solución para erradicar las desigualdades entre el Norte y el Sur?

La educación es importante pero no suficiente. La educa-

ción, en la medida en que puede influir en el cambio de las estructuras es fundamental, pero hay quienes piensan que el sistema está bien como está y que quien es pobre lo es porque quiere. Para transformar este pensamiento se necesitan acciones políticas y sobre todo, que los países del Sur ejerzan presión sobre el Norte, obligándolo a ceder. Por eso, son también muy importantes los movimientos sociales. Pero la solución pasa por cambiar las relaciones internacionales; por que los países ricos aporten más fondos, por la condonación de la deuda, que tiene subyugados a los países pobres; por frenar la globalización neoliberal y por generar relaciones de cooperación más justas.

Hablando de educación y transformaciones sociales, ¿cree que la Universidad debe ampliar su acción a nuevos sectores sociales?

Yo siempre he apoyado todo lo que sea ampliar el conocimiento y la cultura y facilitar su acceso

“Queremos trabajar para erradicar las causas de las enfermedades del Sur, no para aliviarlas, porque estamos convencidos de que no toda la cooperación al desarrollo es igual”

a aquellas personas que por razones diversas no han podido acceder a la universidad. En este sentido, ya contamos con algunas experiencias como el Aula de Mayores, aunque, ciertamente, la universidad debería abrirse a nuevas iniciativas, salir de sus fronteras y dejar de ser autista. La universidad tiene que dejar de ser exclusivamente un centro de excelencia de investigación porque, aunque eso está muy bien, tiene que preguntarse si lo que hace, y cómo lo hace, sirve para algo. Todo lo que sea llegar a más gente, bienvenido sea. Existen experiencias interesantes en este sentido que se pueden aplicar, aunque no

como una forma reglada de enseñanza.

En relación a la participación, ¿qué espacios tienen previstos crear?

Por el momento, ya hemos creado un nuevo periódico con el objetivo de dar cabida a todos y no sólo a los triunfos del rectorado. Queremos ser una vía de expresión de las inquietudes y preocupaciones de los movimientos sociales.

¿Y Radio Complutense?

Es otro espacio interesante como intercambio, pero tenemos un problema de difusión, ya que sólo se escucha en el recinto universitario y en horarios lectivos.

¿Cómo ve a los universitarios de hoy en día?

Hasta hace poco las encuestas reflejaban una tendencia hacia el conservadurismo, pero parece que últimamente está cambiando y en ello, creo que ha tenido que ver la movilización en contra de la guerra en Irak, que contribuyó a fomentar la conciencia política y los movimientos sociales. Sin embargo, es cierto que la imagen del universitario ya no es como en otras épocas en las que, tanto

bajo una dictadura, como en España, o en Europa, existía un sector contestatario, que luchaba contra el sistema capitalista y la sociedad de consumo. Ahora el universitario es una persona más conformista e incluso los sectores más críticos son diferentes a los que vivimos en años como el 68. Yo creo que los jóvenes más comprometidos leen menos que en aquella época y ahora sus fuentes de aprendizaje son fundamentalmente las charlas, conferencias, seminarios, etc. Supongo que todo ello es consecuencia de la sociedad en la que vivimos, en la que el grado de lo que hoy se llama *libertad* depende de la cantidad de dinero.



Cada vez más inhumana e injusta

Juan Guirado*

De los 42.717.064 habitantes de España, 2.672.596 son extranjeros. Así lo establecen las cifras oficiales de población del último padrón, aprobado con fecha 1 de enero de 2003. A lo largo de 2002: de los 879.170 habitantes que ganó España, 694.651 eran extranjeros. La inmigración consolida así su protagonismo como principal fuente de crecimiento demográfico.

La lucha por la defensa de los derechos de las/os trabajadoras inmigrantes en nuestro país y por conseguir el reconocimiento como ciudadanos a los más de 2,5 millones de personas que conviven hoy en España se ha convertido en el verdadero termómetro de la calidad democrática de nuestro Estado social, democrático y de derecho.

“Una de las pruebas más importantes a las que se va a ver sometida la Unión Europea ampliada en los próximos años y en las próximas décadas es cómo va a abordar los retos de la inmigración. Si las sociedades europeas responden como es debido, la inmigración las enriquecerá y fortalecerá. Si no, los resultados pueden ser el descenso del nivel de vida y la división social”. (Kofi Annan).

El pasado 22 de diciembre de 2003 entró en vigor una amplia reforma de diferentes leyes del ordenamiento jurídico español (Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre), con una evidente intención de limitar derechos a los extranjeros no comunitarios que residen en España.

No olvidemos que esta es la tercera reforma en dos

años de la Ley 4/2000, un hecho sin precedentes en Europa, que constata el fracaso de la política migratoria del gobierno basada en el control y represión de los flujos migratorios, vinculando política de seguridad e inmigración, dejando de lado las políticas de integración social relativas a la vivienda, la sanidad, la educación, los servicios sociales y la exigencia de eliminar las situaciones de abuso y los derechos laborales de las personas inmigrantes.

“Todo ese itinerario normativo ha construido un estatuto jurídico de excepción, que se caracteriza por institucionalizar la discriminación y exclusión, pretendidamente justificadas por razón de la nacionalidad del sujeto administrado. Ni la persona ni sus derechos fundamentales cuentan cuando se trata de inmigración. Esa desconsideración afecta a derechos fundamentales económicos, sociales y culturales. Es un estatuto de *apartheid legal* en el que las garantías jurídicas y derechos fundamentales quedan mermados hasta hacerlos irreconocibles y en el que esos sujetos cuentan sólo como herramientas de trabajo, no como personas. Los inmigrantes se ven convertidos en infrasujetos de Derecho, acusados además por una legalidad que consagra su vulnerabilidad,

“Es un estatuto de apartheid legal en el que las garantías jurídicas y derechos fundamentales quedan mermados hasta hacerlos irreconocibles”

pues establece una fuerte precarización; por todo ello, difícilmente consiguen vivir con dignidad”. (Extracto del Manifiesto de Madrid elaborado el pasado mes de diciembre por un grupo de estudios de las políticas de extranjería e inmigración en España.

Una política improvisada

Estos cambios demuestran que las acciones del Gobierno, más allá de ser fruto de una reflexión serena o de la necesidad de adaptar nuestra legislación a la evolución de la realidad migratoria en nuestro país, es una alocada improvisación fruto de continuas reformas normativas y políticas erráticas que se han venido practicando en los últimos años en nuestro país, en materia de extranjería. Este nuevo escenario no afecta únicamente a la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, sino que reforma la Ley de Procedimiento Administrativo Común, la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Competencia Desleal y va consolidando una línea de actuación política chapoteada por actitudes como las mencionadas a continuación:

- La reciente instrucción de la Fiscalía General del Estado sobre el retorno de los menores de edad inmigrantes no acompañados, que conculca las legislaciones internacionales, estatales y autonómicas de defensa de los derechos de la infancia.
- La posición del Gobierno del Estado Español en la cumbre de la Unión Europea en Sevi-



lla en la que el tema del control fronterizo fue la prioridad de su agenda política, intentando arrancar compromisos (no conseguidos), como el de castigar política y económicamente a los países que no cumplan con el control de la inmigración irregular, en alusión directa a Marruecos.

- La promulgación mediante Ley Orgánica 11/2003 de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración de los extranjeros, incluyendo modificaciones en el Código Penal y Civil español para agilizar las expulsiones bajo la excusa de combatir el tráfico ilegal de personas.

Voces de protesta

Muchas han sido las voces que se han unido para lanzar un grito de denuncia ante este panorama desolador: organizaciones sociales, sindicales, académicas, universitarias y recientemente la propia subcomisión de extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, que ha impulsado una petición al Defensor del Pueblo sobre la posible inconstitucionalidad de determinados artículos de esta reforma. Y muchas son las razones para no aceptar este nuevo endurecimiento de la ley.

- La enorme dificultad de entrar en nuestro país de manera legal, derivada del endurecimiento de la política de concesión de visados, conduce a un claro predominio de las entradas irregulares. Ello ha abocado a cientos de personas a malvivir en poblados de chabolas improvisados, sin cobijo, agua o saneamiento alguno, con pautas de alimentación irregulares y con un limitado acceso a la asistencia sanitaria.
- El Gobierno mantiene cerrada cualquier vía para la documentación de las cientos de miles de personas que se encuentran en España sin papeles y sin poder trabajar legalmente condenados a la economía sumergida y a la exclusión social. Además, se encuentran cercenados dere-



chos fundamentales de los inmigrantes como el de reunión, asociación, sindicación y manifestación.

- La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local convierte el padrón municipal en un instrumento para la persecución de los inmigrantes indocumentados, atentando contra el derecho a la intimidad que es inherente a toda persona. Estar empadronado, requisito básico para acceder a los servicios sociales, a la educación y salud normalizada, está generando una angustia innecesaria en aquellas personas que confiaron en las campañas por el empadronamiento y hoy se encuentran en situación irregular.
- El refuerzo de la política de control de entrada al país, otorgando a las compañías de transporte un papel policial obligándolas a facilitar un listado de todos los extranjeros embarcados. Parece obvio que estas empresas se negarán a trasladar a España a todas aquellas personas que carezcan de la documentación necesaria, situación en la que suelen estar muchos refugiados, que no pueden esperar durante meses a la concesión de un visado cuando, desesperados, esperan salvar su vida.
- Se ha construido un estatuto jurídico aparte para el inmigrante no comunitario, en el que se vulneran preceptos constitucionales como las ga-

rantías jurídicas en los procedimientos administrativos, el derecho de acceso a la jurisprudencia ordinaria, el derecho a la presunción de inocencia como garantía judicial, el derecho a la tutela judicial efectiva.

Esta nueva legislación sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España viola los derechos humanos fundamentales. Es injusta, inhumana y no es capaz de dar respuesta a las necesidades y a la realidad del fenómeno migratorio en nuestro país.

Ante la inexistencia de una oposición política fuerte que cuestione este modelo, es preciso impulsar y exigir alternativas desde la sociedad. La más inmediata y urgente es pedir una solución a la situación de los centenares de miles de personas indocumentadas. Debemos plantearnos si queremos continuar con la política dura y represiva frente a la inmigración, caminando hacia una sociedad cerrada en sí misma, o si preferimos poner en marcha una política incluyente e integradora, en una sociedad abierta, generosa y solidaria. Y para lograr eso, hace falta una legislación radicalmente diferente y una sociedad que trabaje activamente por la integración.

* **Juan Guirado** forma parte del Grupo de Género e Inmigración de ACSUR-Las Segovias en la Región de Murcia.

¿Un paso hacia la democracia o un juego entre élites?

Carlo Arreaga Rojas y Diego Jiménez Miraya*

La República de Guatemala ha celebrado las segundas elecciones democráticas tras la firma de unos Acuerdos de Paz que pusieron fin a más de tres décadas de “conflicto armado interno”, denominación con la que eufemísticamente se conoce al oscuro periodo de represión estatal extrema que caracterizó la vida social y política del país durante aquellos años. Este hecho, que en un principio pudiera parecer un avance en el largo camino hacia una mejor calidad de vida y un mayor disfrute de las libertades fundamentales y los derechos humanos, adolece de una serie de obstáculos y trabas, debilidades y contradicciones que nos hacen ser cautos, tanto con los resultados electorales, como con el proceso que las elecciones en sí mismas representan.

El sistema presidencialista guatemalteco, unido a la especial idiosincrasia de la sociedad *chapi-na*, se traduce en un ejercicio personalista del poder y en la aceptación, implícita o explícita, por parte de un gran porcentaje de los ciudadanos y ciudadanas de este caciquismo. Es por ello que la campaña electoral estuvo marcada por el individualismo, la debilidad de las bases partidarias y por el triunfo de la imagen sobre las ideas. Predominaron las estrategias de marketing sobre los valores y las ideologías, las consignas sobre los programas. Y a todo ello se une una desintegración de partidos que desemboca en la concurrencia de más de diez en un

Congreso de 158 miembros y en un país de 12 millones de habitantes.

¿El resultado? Si atendemos a los informes de una buena parte de los observadores internacionales y a los artículos de la llamada prensa independiente: “un triunfo de la ciudadanía guatemalteca”, “una colosal fiesta cívica que fortaleció la joven democracia”, “un avance decidido en el camino por el logro de un mayor bienestar”. Si profundizamos un poco más en los entresijos del proceso seguido en los últi-

de la pugna entre la derecha (Oscar Berger, de la Gran Alianza Nacional, GANA) y el centro-izquierda (Álvaro Colom, de la Unión Nacional de la Esperanza, UNE) en la segunda vuelta de las presidenciales guatemaltecas (por no alcanzar la mayoría de votos en una primera vuelta se realiza una segunda pocos días después). Aceptar dicha división ideológica, tan válida en otras latitudes, sería renunciar a un correcto entendimiento de la realidad. Y es que, si por algo se diferenciaban ambas opciones presidenciales era más por las siglas, los colores, los símbolos y las canciones de campaña, que por una efectiva confrontación de ideas.

Por lo demás, ambas organizaciones cuentan entre sus filas con miembros destacados de la contrainsurgencia militar, ambas están financiadas por grandes empresarios y ambas utilizaron, en mayor o menor medida, el discurso (que a más de uno nos recordó las consignas del fascismo europeo) de la unión de la nación guatemalteca por encima de diferencias de género, clase y etnia. El sistema político excluyente, la crisis económica crónica, la persistente impunidad ante las violaciones a los derechos humanos, el racismo arraigado en las relaciones sociales, la permanencia de los privilegios familiares, el papel subalterno de las mujeres o el injusto reparto de la riqueza (el segundo más desigual de toda América Latina) son temas que no entraron en la agenda.

“Tras escuchar a Saramago hablar de la comedia de la democracia que experimentan los europeos, no cabe sino denominar al ejercicio electoral guatemalteco como una tragedia en toda regla”

mos meses y logramos calibrar en su justa medida los resultados electorales, podremos extraer algunas conclusiones que cuestionan tan cacareados avances, sin dejar de ser conscientes del enorme triunfo que supone, para una sociedad tan golpeada como la guatemalteca, el experimentar un traspaso de poder sin “contratiempos”.

Berger vs. Colom o la muerte de las ideologías

Sorprendió leer los titulares de la prensa internacional, incluida la del Estado español, cuando hablaban



Así las cosas, no sorprende la victoria de Berger, miembro de la oligarquía nacional, cuyo dudoso mérito durante la campaña fue el de mantener la gran ventaja con la que partía al comienzo de la carrera electoral, contando para ello con el inestimable apoyo de los medios privados de comunicación (que le hicieron aparecer como el “contrario” de Ríos Montt y su partido).

¿El fin del General?

Pero el verdadero protagonista de estas elecciones ha sido, por enésima vez, el general retirado Efraín Ríos Montt. Desde el momento mismo de la convocatoria, su partido, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), utilizó todos los cauces legales e ilegales y aprovechó todas las grietas del sistema para conseguir inscribir, de forma completamente inconstitucional, al genocida. Este esfuerzo no se vio, sin embargo, respaldado a la hora del sufragio. Pese a ello, es demasiado apresurado sepultar al general en el olvido. Sus números, aún teniendo en contra a la mayor parte de los medios privados de comunicación y a una buena porción de la cúpula empresarial del país, se situaron a tan sólo seis puntos de Colom, el candidato que disputó la segunda vuelta con el actual presidente. Además, el FRG ha mantenido su posición de primera fuerza en el Congreso de la República con 46 curules (la coalición de partidos GANA tiene 49, pero ya presenta sus primeras fisuras) y cuenta con prácticamente la mitad de las 331 alcaldías del país. En el Altiplano quedó patente la fuerza del FRG, no por su apoyo popular, sino por su capacidad para resucitar los mecanismos de terror y de control social de la etapa del conflicto. Todo ello, unido a numerosos actos de corrupción y compra de votos, explican el triunfo de quienes sembraron de muertos las poblaciones indígenas de los departamentos occidentales¹.

Una izquierda debilitada

Otro hito destacable es el que se refiere a los modestos resultados de la *izquierda* en el proceso electoral guatemalteco, sobre todo cuando



América Latina parece estar asistiendo a una suerte de resurrección de movimientos políticos progresistas a distintos niveles. Por un lado, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) obtuvo el 2,58% de los votos, lo que le permitió obtener dos diputados y un puñado de alcaldías. Mientras, la Alianza Nueva Nación (ANN), escisión de la anterior, alcanzó 6 curules en el Congreso, posiblemente gracias al tirón electoral de la diputada Nineth Montenegro². De este modo, una de las partes firmantes de los Acuerdos de Paz en 1996 pierde la mayor parte de su representatividad en tan sólo ocho años.

Las razones para ello son tan diversas como contundentes, comenzando por la permanencia de formas y estructuras militaristas. Pero hay otras causas que precipitaron su fracaso electoral: falta de ideas nuevas, resistencia a abandonar usos políticos obsoletos, ausencia de una propuesta programática que esté de acuerdo con la actual situación del país y de la sociedad, relación vertical con el movimiento social, omisión de las demandas específicas del pueblo maya, inadaptación a la lucha electoral y transmisión de una imagen de estancamiento político. No obstante, no debemos pasar por alto las dificultades para desarrollar un discurso de izquierda en una sociedad bombardeada por una propaganda anticomunista de lo más rancia durante cerca de 35 años, además del asesinato, tortura o desaparición de los principales líderes políticos del movimien-

to social y popular en la década de los 80 y 90.

La tragedia de la democracia

Tras escuchar a Saramago hablar de la “comedia de la democracia” que experimentan los europeos, no cabe sino denominar al ejercicio electoral guatemalteco como una “tragedia” en toda regla. Y es que, detrás de toda la parafernalia electoral, detrás del obscuro gasto de decenas de millones, detrás del ajetreado ir y venir de urnas y papeletas, no se esconde en Guatemala más que un macabro teatro en el que un puñado de familias sigue luchando por mantener el poder, en detrimento del bienestar de la inmensa mayoría de la población.

Teatro porque los excluidos de siempre siguen sin tener capacidad para decidir, afectados por el terror, un censo obsoleto, la diaria lucha por la supervivencia, altos porcentajes de analfabetismo e incluso dificultades físicas para acudir a las urnas. Todo ello, en el seno de un sistema que obvia la organización propia de los pueblos originarios de Guatemala³.

Teatro porque la distinción entre las opciones políticas responde más a la confrontación entre intereses privados, económicos y comerciales que a un debate ideológico real, por lo que el sistema social, vertical y excluyente, no se ve afectado en lo más mínimo y el modelo económico propuesto se limita a repetir los dictados marcados por los ritmos de la globalización.



Teatro, porque el nuevo presidente se hace cargo de un gobierno sin Estado, en el que las instituciones públicas renuncian a toda capacidad de maniobra frente a los sujetos del mercado, en el marco de la firma de los tratados de libre comercio; con una deuda externa creciente; prácticamente sin recursos financieros debido a unas tasas impositivas ridículas; y con un congreso desvertebrado⁴.

Teatro, porque la llamada Agenda de la Paz ha servido únicamente para legitimar las distintas opciones electorales, mientras que los acuerdos firmados en 1996 fueron relegados a un segundo plano en la formulación del programa de gobierno de Berger.

En este escenario trágico únicamente la presión de una sociedad civil guatemalteca cada vez más consciente, pero con escasos medios de presión, y el acompañamiento de la comunidad internacional para dar seguimiento a los Acuerdos de Paz podrían encauzar democráticamente un proceso viciado desde su origen. Un buen ejercicio intelectual podría consistir en buscar las similitudes y diferencias entre esta pieza teatral y la que van a protagonizar las instituciones españolas en el mes de marzo... Claro, que allá no se pone en juego la vida de los votantes, al menos por ahora.

¹ Por poner un ejemplo contundente; el nuevo alcalde de Nebaj una de las poblaciones más golpeadas por la violencia estatal de los 80, fue el último comisionado militar (pieza clave de la represión contrainsurgente) en la región.

² En los últimos días se separaron del partido dos diputados de la ANN, pasando al grupo independiente.

³ Tan sólo un 10% de los curules son ocupados por mujeres, porcentaje similar al de diputados y diputadas mayas. El pueblo xinka y garífuna no están representados específicamente en el Congreso.

⁴ La conformación del actual Organismo Legislativo es la más dividida de la historia democrática de Guatemala, quedando sujeto, una vez más, a un transfuguismo galopante que ha desembocado, en menos de 20 días desde su conformación, en el cambio de partido por parte de 10 diputados.

***Carlo Arreaga Rojas y Diego Jiménez Miraya** forman parte del equipo de ACSUR Las Segovias en Guatemala. contagua@intelnet.net.gt

Carta desde Palestina

La tierra de los muros

Víctor de Currea-Lugo*

Discutir contigo es discutir sobre viajes y murallas. Tú sigues atrapado sin viajes en tu ciudad y yo vivo en la tierra de las murallas, o de los muros si te resulta más coloquial. Esta no es una tierra santa, no más santa o pagana que las otras, es como todas aquellas en que ha habido un muerto o un amor, pero sin duda en una tierra de muros.

Jerusalén, como todas las ciudades antiguas se precian de sus murallas, se parece en eso a los guerreros que exhiben sus cicatrices con orgullo. Y muchas veces eso son las murallas: cicatrices del pasado, pero las ciudades como los antiguos heridos repiten una y otra vez sus eternas batallas. Con el tiempo muchas de esas ciudades se han convertido en miradores turísticos, como si los guerreros del pasado, sin saberlo, no defendieran la ciudad de los enemigos sino que buscaran preservar sitios para el turismo del futuro.

Aquí no es menos, pero si es más. La primera noche fue inevitable ver Jerusalén desde el Monte de los Olivos y ver su muralla ordenando el paisaje, porque eso hacen entre otras cosas las murallas: ordenar, además de organizar y también de dar órdenes. Allí estaban desde la eternidad, esperando ser miradas, la puerta de Damasco y la de Jafá.

Luego estuve en un muro demasiado famoso para tan pocas piedras: el muro de las lamentaciones. Pero esa es su magia, representa lo que ya no es, pues es el último vestigio del Templo de Salomón, es un muro que es lo que no es y esa es precisamente su magia. Allí los judíos asisten cada *sabbath* a rezar por sus cosas, como tu madre algún domingo y la mía alguna tarde, como todos los que tienen un dios que los perdona.

Hace poco visité un tercer muro. Ese es más difícil de explicar porque no viene del pasado,



sino va para el futuro. No tiene siglos sino días, no fue hecho para proteger sino para encerrar. A lo largo de Cisjordania, ese pedazo de tierra que le dejaron a los palestinos, serpentea un muro, un muro inmenso, no es un muro de aquellos que saltábamos en la escuela cuando niños, no el muro del patio del vecino, no el muro de la cancha de fútbol. Este es un muro-muro.

Primero, antes del muro, como si fuera su prehistoria, hubo otras formas de encerrar cuyo mensaje era el mismo: cierres, *checkpoints* (controles militares), alambradas. Israel es el país con más cercas y letreros de prohibición que he visto en mi vida. Ahora es un muro-muro. El tiempo que yo gasté para aprender a caminar, 14 meses, fue el necesario para construir los primeros 128 kilómetros del muro, 2 millones de dólares valieron cada uno, y ya van en más de 160 kilómetros de un total de 730.

Los muros no existen sólo en sus piedras sino que se van metiendo en las cabezas. Cuando estuve en Berlín el muro de allí sobrevive todavía —por lo menos eso sentí yo—, el muro estaba en las palabras de las personas cuando decían Este y Oeste, en el tipo de ropas, en las construcciones y hasta en la forma de mirar.

Este muro-muro en Palestina a su paso separa pueblos, corta acueductos, destruye cosechas, derrumba escuelas y casas, divide familias, aleja vecinos y amigos de sus amigos palestinos, es como un dios infame, es como el dios del *apartheid* que en su primera expedición ha arrancado más de cien mil olivos.

No hay fronteras bonitas (dímelo a mí que soy de profesión inmigrante) máxime si es un muro, como no puede haber una cárcel bonita aún pintada y perfumada. Desde los *checkpoints* a comienzos de la década pasada, el tiempo en Palestina no se mide en kilómetros sino en controles militares. El tiempo y la espera tienen un tercer elemento tridimensional más allá del plano mapa de las agujas del reloj: la angustia.

Cuando conocía el muro-muro, un trabajador local me lo explicaba y no pudo evitar contarme su propia historia. Tenía dos niñas gemelas de dos semanas de nacidas y ambas enfermaron. Al llegar al *checkpoint* los soldados de turno no las dejaron cruzar hasta el hospital a pocos metros. Ellos esperaron y esperaron, es difícil saber lo que es esperar en estos casos y al final, entre la impotencia de su padre, el llanto de su madre, la latas de la ambulancia estacionada, ambas niñas murieron esperando. Su padre, ahora me indica con su mano el muro que reemplaza los *checkpoints*.

“Los muros no existen sólo en sus piedras, sino que se van metiendo en las cabezas”

A cada avance del muro, este le mete un mordisco robando la tierra más fértil a los palestinos para anexarla al gran Israel. Algunas veces deja dentro del muro a las casas y por fuera a la tierra; según la nueva ley la tierra entre el muro y la llamada Línea Verde (la frontera internacional) pasa a ser israelí. Al final del muro-muro la mitad de Cisjordania será israelí: las fértiles tierras del valle del río Jordán, los acuíferos de la zona de Tulkarem y Jenín, los alrededores de Jerusalén. Los ahora ex dueños palestinos necesitan permiso para cruzar el muro y trabajar sus propias tierras.

Desde la guerra de 1967 por el control del Río Jordán los han intentado secar. Hasta ahora 36 pozos y más de 200 cisternas están aisladas de sus comunidades y han perdido 35 kilómetros de acueductos cortados por las excavadoras que hacen el muro. Luego, Cisjordania será solo cuatro cantones con poquísima agua de

donde podrán salir los palestinos a trabajar en los campos judíos o en las fábricas judías. Y la comunidad internacional celebrará con vino la paz, por fin, del Oriente Próximo.

En Qalqiliya, ciudad rodeada por el muro-muro, el control militar de entrada y salida abre a las siete de la mañana y cierra a las siete de la noche, y vieras lo triste que es oír a los hombres pedir a sus esposas que no tengan los niños en la noche; en los controles a lo largo del muro son comunes los maltratos físicos y verbales, las humillaciones y los abusos físicos; los médicos no pueden llegar hasta la gente: En Azzun Atma fueron restringidas aún más las visitas médicas a la comunidad, pasando de dos días por semana a un total de cuatro horas semanales; en Tulkarem, 650 profesores tienen dificultades para llegar a sus sitios de trabajo.

Cuando hagas el próximo pe-sebre (o Belén o Nacimiento, o como lo quieras llamar) pon un muro alrededor de la ciudad, como existe ahora. Incluye también un *checkpoint*, una alambrada y un asentamiento, no será muy católico pero será muy realista.

¿Y qué hacemos los llamados humanitarios? Estamos, como diría Cavafis esperando a los bárbaros arrojados en la bandera de la neutralidad. Pero tú sabes bien que entre la víctima y el victimario no hay neutralidad posible, que eso es complicidad. En la segunda guerra mundial, los delegados de la Cruz Roja visitaron los campos nazis. ¿Hubiera sido suficiente pedir buena comida y un trato digno para los judíos presos antes de que los llevaran a las cámaras de gas? ¿Será suficiente explicarle a mi sobrino que mientras el muro crecía, yo ayudé tan sólo a repartir ovejas para que los cada vez menos palestinos que se quedan en su tierra sobrevivieran entre esas paredes?

***Víctor de Currea-Lugo** es miembro de la Campaña palestina “Stop the Wall” y representante para España. www.stopthewall.org



En Honduras, contra la violencia de género

Adela García García*

Desde enero de 2003 la responsabilidad en ACSUR-Las Segovias del seguimiento técnico-político de los proyectos específicos de género se traspaasa desde el Área de Proyectos al Área de Género y Desarrollo con la intención de lograr un mayor nivel de intercambio y retroalimentación de las prácticas y experiencias de trabajo con la organizaciones de mujeres del Sur a la vez que se posibilita la construcción de un discurso conjunto entre organizaciones de mujeres Norte-Sur.

Así, desde el Área de Género asumimos este reto compartido con nuestras contrapartes, concretamente con el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) de Honduras con quienes iniciamos el 1 de abril de 2003 el proyecto *Uniendo esfuerzos para la prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres* cofinanciado por el Ayuntamiento de Madrid.

¿Dónde se enmarca este proyecto?

En Honduras, los avances en materia de leyes, en el reconocimiento gubernamental de los derechos de las mujeres y en una mayor sensibilidad por parte de la ciudadanía y de las instituciones del gobierno son efecto de las acciones emprendidas por los grupos de mujeres organizados. Entre los principales avances logrados a favor de las mujeres están: la creación de la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público (1994), la aprobación de la Ley Contra la Violencia Doméstica (1997), la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (2000) y la estructuración del Instituto Nacional de la Mujer (INAM 1998).

Durante el año 2001, el Colectivo Contra la Violencia, del que forma parte la organización local CDM, impulsó un Pacto Político Mínimo a favor de las mujeres que fue negociado con los distintos partidos políticos para lograr que el próximo gobierno que iniciara su gestión en

enero del 2002 lo incorporase como parte fundamental de su propuesta de trabajo. El pacto político incluía aspectos relacionados fundamentalmente con equidad, transparencia y democracia y destacaba la institucionalización del Instituto Nacional de la Mujer (INAM), la aplicación efectiva de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y la creación y fortalecimiento de oficinas municipales de la mujer.

Es en este contexto de trabajo previo por parte de la organización local CDM donde se enmarca el proyecto *Uniendo esfuerzos para la prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres* que tiene como objetivo el fortalecimiento de la participación ciudadana y el liderazgo de las mujeres de los municipios de Marcala, Choluteca y El Triunfo para generar mecanismos de prevención, atención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres.

Capacitación, sensibilización y redes comunitarias

Este proyecto contempla además acciones de capacitación, campañas de sensibilización y fortalecimiento



to de redes comunitarias contra la violencia de género. Los puntos claves son:

— El proyecto se enmarca dentro del Programa de Participación ciudadana de la organización local.

— Redes Contra la violencia: son redes mixtas donde participan mujeres (en su mayoría) pero también hombres, donde están representadas tanto las organizaciones de mujeres del municipio como autoridades locales, policía, fiscalía, juzgado de paz, profesorado, personal de los centros de Salud y otras organizaciones comunitarias de base.

— Oficinas Municipales de la Mujer (OMM): legitimación de la coordinadora de cada una de las oficinas municipales de la mujer, que han sido ratificadas por las corporaciones locales y están asumiendo su cargo (anteriormente era un cargo por designación de la alcaldía, normalmente una persona del entorno familiar). Las representantes de las OMM participan activamente en la Redes contra la Violencia y coordinan las estrategias de intervención municipal en materia de igualdad de oportunidades a implementar por las corporaciones locales.

— Espacios de socialización: se llevan a cabo encuentros de intercambio de experiencias y de buenas prácticas tanto de las redes contra la violencia como de las oficinas municipales de la mujer con el resto de municipios de Honduras. Además, se organizan foros en centros educativos así como capacitación tanto para las redes como para el personal

“El gran reto: la violencia de género no es un problema de las mujeres. La responsabilidad de la erradicación total de la violencia corresponde a la sociedad en su conjunto”

de las corporaciones locales en materia de violencia de género.

— Construcción del primer centro hondureño de Atención Integral a la Mujer: esto significa que el centro contará además de con un servicio de acogida transitoria a mujeres maltratadas,

con un servicio de asesoría legal, asistencia psicológica y un servicio de orientación laboral.

En la II fase del proyecto, seguiremos trabajando en la promoción y defensa de los derechos humanos y ciudadanía de las mujeres, con especial énfasis en la elaboración de políticas públicas con equidad de género, así como en los procesos de descentralización en cuanto a mecanismos de igualdad. Todo ello, en coordinación con la sociedad civil a través de las redes de mujeres mediante acciones de sensibilización, capacitación, promoción y atención a mujeres afectadas por la violencia de género.

El gran reto: la violencia de género no es un problema de las mujeres. La responsabilidad de la erradicación total de la violencia corresponde a la sociedad en su conjunto y los Estados deben garantizar el derecho a una vida sin violencia así como implementar un modelo de educación no sexista en la escuela (coeducación). Y por último, aprobar una ley integral contra la violencia de género. Allí y aquí....

*Adela García García, Área de Género y Desarrollo de ACSUR-Las Segovias. genero@acsur.org

Ficha del proyecto

“Uniendo esfuerzos para la prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres (1ª fase)”. Honduras.

El objetivo general de este proyecto es fortalecer la participación ciudadana y el liderazgo de las mujeres para incidir en la gestión municipal a fin de contribuir a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Las principales actividades están dirigidas a promover la capacidad de incidencia de las mujeres. Para ello se han creado y/o fortalecido redes contra la violencia de género y se han puesto en marcha oficinas municipales de la mujer en los diferentes municipios de intervención (Marcala, Choluteca y El triunfo). En esta primera fase, además, se ha construido el Centro de Atención Integral de la mujer en Choluteca.

Contraparte. Centro de Derechos de las Mujeres (CDM).

Población beneficiaria. Directa: 2.979 Mujeres y 1.276 hombres. Indirecta: 105.840 mujeres, 43.360 hombres.

Sector de cooperación: Género y Desarrollo.

Cofinanciación: Ayuntamiento de Madrid.

Importe: 280.694 euros.

Centro de Derechos de las Mujeres (CDM)

CDM es una organización social hondureña sin fines de lucro, feminista y autónoma. Creada en 1992, sus principales objetivos son la promoción y la defensa de los derechos humanos de las mujeres desde el marco jurídico social; la contribución a la transformación de valores, actitudes y comportamientos discriminatorios para la construcción de una sociedad justa y equitativa mediante la propuesta jurídica social, la incidencia política y la promoción del ejercicio de una ciudadanía real de las mujeres.

Sus principales ejes de trabajo son: violencia doméstica, derechos sexuales y reproductivos, derechos laborales, educación no sexista y participación ciudadana de las mujeres. Estos ejes de trabajo se articulan a través de cinco programas de intervención: Atención y Prevención de la violencia de género, Programa de Análisis Jurídico, Programa para la Participación ciudadana, Mujer y Maquila y el Programa de Comunicación.



Una opción diferente al dilema "o guerra total o negociación"

José Aristizábal García*

Una vez más, como en tantas otras, el gobierno colombiano ha puesto en marcha la guerra como solución al conflicto. El presidente Álvaro Uribe persigue una victoria militar sobre la guerrilla y no vacila en adecuar y subordinar todas las políticas e instrumentos del gobierno y del Estado para lograr su objetivo. Su plan de desarrollo, su política internacional, sus medidas económicas, su agenda legislativa, con sus reformas de la ley y la constitución, su negociación con los paramilitares y hasta un cambio de lenguaje han sido puestos al servicio de la solución del conflicto por la vía militar.

Por lo que respecta a las guerrillas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han pasado a la defensiva estratégica mientras mantienen acciones dispersas en distintas regiones del país y persisten en tratar de entrar a las grandes ciudades. Además, han llegado a acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para desarrollar conjuntamente una respuesta a la ofensiva gubernamental.

El gobierno y los militares afirman que están cerca de derrotar a la guerrilla y de dar solución definitiva al conflicto. Pero ¡qué inocencia! Para que se produzca un cambio sustancial en la guerra se requiere algo más que el endurecimiento de la estrategia militar y diplomática por parte del Estado y mucho más que el aislamiento político y diplomático de la insurgencia.

Las FARC no han recibido aún ningún golpe realmente contundente. Su capacidad militar, lograda en los años noventa, no ha sido revertida y ninguno de sus mandos nacionales ha muerto o ha sido capturado. Si hay algo que sabe hacer bien esta guerrilla es replegarse, ponerse a la defensiva, dispersar sus fuerzas para evitar ser blanco del adversario y esperar a que pase la arremetida, mientras debilita al enemigo.

Ni el Estado ni el país tienen los recursos económicos y financieros suficientes para sostener el esfuerzo bélico que implica una estrategia de lucha contra la guerrilla por la vía de la fuerza. Aunque se apruebe otra nueva reforma tributaria, la crisis económica y social de las clases medias y populares colombianas no puede resistir el esfuerzo sostenido que esta estrategia demanda. La ineficacia de la administración pública y

la corrupción tampoco favorecen esa tarea. Además, la superación de la crisis económica no es tan probable y aún en el hipotético caso de que todos los recursos se dedicaran exclusivamente a pagar la deuda, los salarios del aparato administrativo nacional y la guerra está demostrado que los presupuestos no alcanzan ni para esas tres partidas.

Además, hay un problema que no se resuelve ni con plata ni con plomo: la pretensión del plan de desarrollo de la seguridad democrática de asumir una presencia activa o un "control del Estado en todo el territorio nacional". Este es un problema estructural que se explica por el proceso histórico de conformación del Estado y la nación colombianos: excluyendo unas vastas regiones del país. Una exclusión que no ha sido sólo territorial, sino también económica, social y política. Esas



son las zonas de colonización, los territorios de la coca, la amapola, la marginalidad y, en muchos casos, del hambre y la miseria, donde otra legalidad le ha ido dando vida a los *paraestados* de la guerrilla, los paramilitares o el narcotráfico. La solución de este problema no puede ser, como con excesiva simpleza se plantea, inyectar dinero a esas regiones: ni hay suficientes fondos disponibles ni es posible asegurar el éxito por esa vía. Tampoco lo es *recuperar* esos territorios a través de la fuerza. Y es que estamos frente a un problema de construcción político-social de nación, de ciudadanía y de país, del Estado que no tenemos.

La ofensiva militar que se está realizando no sólo pasa por encima de las libertades y derechos de los ciudadanos, sino que también contraviene las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, al tiempo que viola el Estado social de derecho. La crisis humanitaria crece cada día y paralelamente, lo hace la resistencia y la alarma entre la comunidad internacional.

En síntesis, esta política no nos lleva a la solución del conflicto sino a agudizarlo, agravarlo, prolongarlo y degradarlo aún más. A la exacerbación de la guerra, al desangre y a la destrucción del país. El ejemplo más contundente de todo ello está en las llamadas “zonas de rehabilitación y consolidación”, creadas por la legislación de emergencia como zonas piloto para rebajar los niveles de violencia, con el resultado de un preocupante aumento de estos niveles.

La historia se repite: lo que está haciendo Uribe no es nada nuevo, se ha hecho desde hace cincuenta años. En 1955 Rojas Pinilla desarrolló la llamada “guerra de Villarrica”, cuando la región de Villarrica y Sumapaz fue atacada por grandes destacamentos de soldados y bombardeos aéreos, con el resultado del

surgimiento de las famosas “repúblicas independientes”. En 1964, durante el gobierno de Valencia el ejército lanzó el Plan Lazo: “16.000 soldados rodearon el estrecho valle de Marquetalia, mientras la fuerza aérea bombardeaba la zona”¹. Su resultado fue la formación de las guerrillas móviles que dos años después se convertirían en las FARC. Y así sucesivamente hasta la “guerra integral” de Gaviria y la guerra actual. Y siempre, desde la guerra contra Corea, bajo la tutela de los consejeros militares estadounidenses.

Superar el pensamiento simplista y reduccionista

Las estrategias mencionadas tienen un denominador común: el

“Sostener que en Colombia no hay una guerra ni combatientes sino la agresión de unos terroristas contra toda la sociedad es simplificar la realidad hasta el delirio”

modo de pensar simplista y reduccionista. Afirmar que la causa del conflicto es “el terrorismo” es reducir todas las madejas de las dinámicas sociales, económicas y políticas y es, además, un pensamiento sospechosamente cercano a las estrategias elaboradas por Estados Unidos. Negarle a las guerrillas el rol de actores políticos y señalarlas sólo como “bandidos y narcotraficantes” es reducir la complejidad del fenómeno guerrillero a una sola de sus múltiples facetas. Sostener que en Colombia no hay una guerra ni combatientes sino “la agresión de unos terroristas contra toda la sociedad” es simplificar la realidad hasta el delirio. Y tratar de dividir a la población colombiana entre los partidarios del presidente Uribe y los *terroristas* no es más que

la representación en el ámbito local de una realidad maniqueísta que promueve el presidente estadounidense George W. Bush a escala mundial.

Ayer fue la “sociedad” frente al “comunismo internacional”, hoy es frente al “terrorismo”; antes “doctrina de la seguridad nacional”, hoy “seguridad democrática”; antes “estatuto de seguridad”, hoy “estatuto antiterrorista”; antes “estado de sitio”, hoy “conmoción interior”. El lenguaje está al servicio de los intereses del mercado en detrimento de los derechos de la ciudadanía. Por ello, si queremos superar el dilema “negociación o guerra total” debemos dejar atrás esta mirada encubridora de intereses específicos e ir hacia una posición más incluyente y colectiva; más comprensiva de sus distintos aspectos, más rica en sus análisis, multidimensional, o compleja.

Una opción diferente

Los triunfos de Lucho Garzón a la alcaldía de Bogotá, Angelino Garzón a la gobernación del Valle, la derrota del referendo y la presentación del Informe de Desarrollo Humano 2003 han hecho visible la necesidad de que en Colombia –después de más de medio siglo bajo el estado de sitio y la “perturbación del orden público”– algo tiene que cambiar. Lo que emerge de estos acontecimientos es la necesidad que tiene Colombia de una reforma de la sociedad y del Estado que sea capaz de superar el narcotráfico, las guerrillas, la dualidad de “las dos Colombias” y avanzar hacia los derechos sociales y la democracia.

Esta reforma posibilitará un nuevo pacto social que materialice la inclusión de las regiones hasta ahora marginadas y de los sectores sociales y económicos excluidos de nuestra historia, con un esfuerzo simultáneo centrado en poner fin a la guerra y a la violencia.





Álvaro Uribe, presidente de Colombia.

Esta reforma debe iniciarse ya, con una previa negociación política con las guerrillas o sin ella. Y esto es así porque los problemas de fondo de la sociedad colombiana trascienden el conflicto armado aunque éste sea una de las expresiones más agudas de su crisis.

En cualquier caso, una negociación del conflicto sin reformas no es deseable. Si esto ocurriera estaríamos en un acuerdo adoptado desde arriba con un nuevo reparto de poderes que dejaría sin resolver los problemas de fondo. Y en estas condiciones, la injusticia y la violencia podrían retornar después de la negociación al detectarse que esos viejos problemas seguirían estando en el centro de la escena, como ha sucedido en El Salvador y Guatemala.

Por otra parte, una negociación con reformas requiere integrar a vastos sectores que no están incluidos ni entre las actuales élites dirigentes, ni entre la contraélite de la guerrilla. Por estas razones, entre la negociación y la reforma, lo principal hoy es la reforma. Y ahora más que nunca, en esta sobreacumulación de crisis que vive Colombia, puede ser

más necesaria, realizable y entendible la reforma.

Una alianza entre los sectores de las élites dirigentes que están a favor de la paz y la democratización del país y las nuevas fuerzas democráticas que se expresaron en las elecciones del 26 de octubre de 2003, decididas a sacar a Colombia de la guerra y la injusticia, podría perfectamente planear y comenzar a convocar y concertar un cambio. Si algo puede ser entendible por la mayoría de la población y movilizarla positivamente; si algo puede ser apoyado por la comunidad latinoamericana y la mayoría de los países del mundo; si algo puede darle una luz de esperanza y dignidad a Colombia es el inicio de una reforma política, económica y social.

Conclusiones: Las relaciones entre negociación, guerra total y reforma

— Una negociación sin reforma no lleva a una paz justa y duradera.
— La reforma requerirá de un nuevo pacto social que una a la gran mayoría de los colombia-

nos y para ello no hay que esperar a que haya negociación. Ella trasciende, es más incluyente y está por encima de la negociación.

— La guerra total, en la situación actual de Colombia, no puede conducirnos a un nuevo país. De la insistencia en la confrontación no saldrá ninguna reforma progresista sino el mantenimiento de la exclusión y la antidemocracia.

— Por ello, entre la negociación y la reforma, lo prioritario es la reforma. Y entre la reforma y la guerra total, la relación es como entre la vida y la muerte.

— La reforma básica del Estado, y no la “guerra total”, tiene la capacidad de superar el desorden, derrotar la violencia y fundar un nuevo orden es la reforma básica de la sociedad y el Estado.

La superación del dilema

La búsqueda de la paz a través de uno de los dos componentes del dilema *negociación o guerra total* (acuerdo o derrota), ha llevado a Colombia durante décadas a un callejón sin salida. Persistir en él es hacerle el juego a quienes están interesados en los negocios de la guerra, el narcotráfico o el mantenimiento del statu quo. Frente a ese dilema, debemos levantar la bandera de la paz a través de la reforma. Y ahora que hay cambios en la gobernabilidad local, es la oportunidad para comenzar a demostrarlo.

¹ Pearce, Jenny. 1990. *Colombia dentro del laberinto*. Altamir. Bogotá.

*José Aristizabal García es un defensor colombiano de los Derechos Humanos acogido por Amnistía Internacional, España. Este texto se basa en la ponencia impartida en los *Encuentros de Acción Humanitaria* organizados por el Ayuntamiento de Córdoba, el IECAH (Instituto de Estudios sobre Conflictos y Auda Humanitaria) y el Instituto de Estudios Transnacionales (INET), Córdoba 15/16 de octubre de 2003.



Daños colaterales

Miguel Romero*

El programa de telebasura “La isla de los famosos” incluye esta temporada, como novedad, que los concursantes que sean eliminados marcharán a Itaqui Bcanga (Brasil) a apoyar a la ONG Plan Internacional en la construcción de una escuela. La página web de la organización www.plan-espana.org informa de que la escuela se construirá “en un tiempo récord de menos de 60 días”, con el fin, imaginamos, de coincidir con el tiempo de emisión del programa. Además, un porcentaje de la recaudación por las llamadas de los espectadores que votan a los “famosos” se destinará al proyecto.

El presidente de la Coordinadora de ONGD David Álvarez ha criticado este producto y ha llamado a una reflexión sobre los límites que deberían establecerse en el marketing publicitario de las ONG.

Por supuesto, creo que las críticas del presidente están más que justificadas. Lo de los “límites” ya me parece más complicado. A estas alturas, confieso mi completo escepticismo sobre la posibilidad de establecer límites a la publicidad de las ONG aceptados por el conjunto del sector y con eficacia práctica.

No es que “todos hagan lo mismo”. Incluso en las peores campañas publicitarias puede establecerse una gradación (degradación, más bien). Por ejemplo, a mi parecer, esto de La isla de los famosos es peor que los *telemaratonés* (como aquel siniestro Padrinos para el triunfo), que son peores que las campañas de Anesvad, que son peores que la publicidad de Intervida, que suele ser peor que la publicidad de Ayuda en Acción, que es, si no

peor, más o menos del mismo nivel, que el spot publicitario del SCH para su campaña de captación de clientes a cambio de pagar vacunaciones a Médicos sin Fronteras,...

Pero ¿hay algún límite moral relevante entre unas y otras? Francamente, no lo veo; creo más bien que el conjunto de estas y otras “malas prácticas” crea un clima en el que lo de los “famosos” es un episodio más; si acaso, “daños colaterales”. Por eso pienso que estos problemas hay que abordarlos, más que buscando un “consenso de límites”, por medio de la crítica y el debate abiertos y, sobre todo, mostrando prácticas de cooperación solidaria.

Esto me lleva al tema que más me preocupa en esta historia. Porque en la web de Plan Internacional hay una sección: “Ellos nos apoyan”, en la que está, entre otras personas conocidas, Maruja Torres. Y el domingo 1 de febrero, *El País Semanal*, publicó un estremecedor reportaje de Juan José Millás sobre los horrores de la vida, si es que puede llamarse así, en Sierra Leona, a donde había viajado por invitación de Plan Internacional. En la conclusión de su artículo, Millás escribe: “Entonces comprendes la importancia de todas estas organizaciones imperfectas (como usted o como yo), pero esenciales hoy por hoy en la marcha del planeta. Si usted dudaba sobre si colaborar o no con ellas, quítese la duda de la cabeza. Con la calderilla que pierde al año entre los almohadones del sofá mientras se embrutece con Tómbola, podría dar de comer a 20

familias y proporcionar educación a 40 niños”.

Maruja Torres ha escrito crónicas de excepcional calidad, doloridas, lúcidas y críticas sobre muchos de los conflictos internacionales de estos años. Y Millás es, entre otras cosas, el “relevo” de Vázquez Montalbán; para mucha gente, *El País* de los viernes empieza por la última columna de la última página, el mismo lugar donde antes empezaba la lectura, añorada, de los lunes.

¿Por qué gente así, tan lúcida y tan crítica, tan exigente cuando escriben sobre cualquier aspecto de la actualidad política y social, abandonan esta exigencia cuando miran a las ONG?

Hay muchas respuestas posibles. La que más me convence, y también me preocupa, es esta: ante los desastres de este mundo y la desconfianza y el descrédito, no ya hacia los “políticos”, sino hacia la “política”, el “asistencialismo”, incluyendo sus peores expresiones: los “apadrinamientos”, conserva una fuerza social muy grande, por no decir que es la expresión más legitimada socialmente de la cooperación al desarrollo.

Difícil lo tenemos quienes trabajamos porque la cooperación al desarrollo sea parte integrante de la acción social y política de una ciudadanía crítica y no creemos que la *calderilla* del Norte alivie la miseria del Sur.

*Miguel Romero es el responsable de Estudios y Comunicación de ACSUR-Las Segovias
sencom@acsur.org

Este cuaderno es una publicación de la ONG de Desarrollo, Asociación para la Cooperación con el Sur (ACSUR)-Las Segovias. El Comité de Redacción está formado por *Montserrat Figuerola, Carmen Coll, Antonio Albareda, Nacho Fernández de Castro, José Santamaría y Miguel Romero (director)*. ACSUR-Las Segovias. Cedaceros 9, 3º Izqda. 28014-Madrid. T. 91.429.16.61 F. 429.15.93. acsur@acsur.org WEB: <http://www.acsur.org> Madrid. Cedaceros 9-3º Izqda. 28014-Madrid. T y F.: 91.429.23.27 Asturias. C/ Instituto, 13, 1º. 33201-Gijón. T. y F.: 98. 535.13.50. acsur.asturias@congde.org Valencia. Puerto Rico 28-1º, 2ª puerta. 46006-Valencia.

T. y F.: 96.380.64.82. acsud.pv@nodo50.org Murcia. Mariano Ruiz Funes, nº 10, entresuelo 4. 30007-Murcia. T. 968.93.15.22 Castellón. Pza. San Pascual, 19 12540-Vila Real (Castellón). T. 964.53.57.62. castellon@acsur.org Baleares. Apartado de Correos 602 07080-Palma de Mallorca. Cantabria. Augusto González Linares, 8. 39016 Santander. T. 942.29.05.72/639.03.26.20 Catalunya. Vía Laietana, 45 1º 1ª Esc. B. 08003-Barcelona T. 93 317 86 07. catalunya@acsur.org Castilla-La Mancha. Prim 49. 13620 Pedro Muñoz (Ciudad Real) T. 926 58 69 36

